

CRONICA DEL MES

Octubre

El mes de octubre va viendo cómo se cierran aún más las salidas políticas y se opta por las soluciones militares, tanto a nivel regional como a nivel nacional. La última reunión de diálogo en Colombia conduce a posturas irreconciliables entre la Comisión de Paz y el FDR-FMLN, con acusaciones mutuas de intransigencia y cerrazón al no aceptar la posición contraria, sin el más mínimo acercamiento a posiciones intermedias. La petición de la izquierda salvadoreña, de que la siguiente ronda se tuviera en territorio nacional, fue rechazada porque el gobierno decía no poder ofrecer seguridad a los contrarios, a lo cual el FDR-FMLN ofreció seguridad a los representantes del gobierno en su "zona controlada"; sin embargo, el Presidente Magaña afirmó que si los representantes de la otra parte entraban al país tendría que dar orden de arresto. El estado de sitio, a su vez, fue renovado por otro mes rutinariamente.

Mientras tanto, en la Asamblea Constituyente se llegaba a un nuevo empujamiento agresivo al volver a debatir los artículos 104 y 105, ya postergados una vez, y que serían dejados para el final de la Constitución, en búsqueda de un acuerdo interpartidario. El diputado Septalín Santos, de PAISA, retornó al PCN, con lo que la coalición PDC-PCN-AD logró los 31 votos necesarios para hacer pasar su proyecto de tenencia limitada de la tierra; pero el día de la votación uno de los miembros del PCN sorpresivamente se ausentó, y los artículos que posibilitarían la segunda fase de la reforma agraria fueron relegados al futuro.

Sin embargo, la polémica no se limitó al seno de la Asamblea, dada la importancia que tenía para el futuro del país. La derecha se movilizó con todos los mecanismos de represión:

ARENA, la ANEP y demás organizaciones poderosas de la empresa privada se pronunciaron categóricamente contra la reforma y se lanzaron a una campaña de acusaciones y amenazas contra sus propugnadores, principalmente ARENA y su máximo dirigente, quienes acusaron a la UPD-UCS y a sus máximos directivos, de colaborar con la guerrilla; dada la presente historia del país, esos señalamientos podrían ser aviso de muerte, por lo que, tanto la UPD-UCS, como AFL-CIO y altos funcionarios norteamericanos salieron a desmentir las acusaciones y a defender a sus personeros, llegando a acusar al mismo D'Aubuisson. Por su parte, la DC y sus bases salieron en defensa de las reformas, mientras que el Consejo Nacional de Empresas Salvadoreñas (CONAES) respondió a ANEP su pretendida representatividad y mostrando su miopía socio-política que ha originado en gran parte la presente crisis nacional. Toda esta lucha y falta de acuerdo en los puntos más conflictivos, originó rumores de un golpe de Estado y el que se vaya extendiendo el comentario de lo costoso de la Asamblea y de la inconclusa Constitución.

Al mismo tiempo, el CCE trató de justificar su lento trabajo basándose en su alto costo, en la tardanza en la aprobación de los esfuerzos presupuestarios o la asignación de los fondos, en la destrucción de archivos de parte de la guerrilla, entre otras cosas, lo cual se viene a agravar con la renuncia del presidente de dicho consejo, supuestamente por razones de salud, aunque también se dieron versiones sobre desacuerdos internos.

La crisis económica sigue golpeando a los sectores más necesitados. Autoridades del hospital Rosales manifestaron que no les alcanza el dinero para lo más perentorio. Los maestros llevan

muchos meses sin sueldo por el doble turno. Se vende leche del IRA a precios muy superiores a los establecidos. La asamblea aprobó refuerzos presupuestarios a diversas instituciones del Estado para poder sufragar los gastos de los últimos meses del año, pero el ministerio de defensa se llevó diez millones y medio, casi el 60% del total. Por otro lado, el cese de labores de los trabajadores del IVU concluyó con un acuerdo que promete futuras mejoras salariales. Con el fin de mantener la situación, la ayuda norteamericana sigue fluyendo: organizaciones filantrópicas donan medicinas, AID dio un nuevo préstamo muy favorable de 32 millones de dólares principalmente en alimentos y el gobierno norteamericano asignó ayuda millonaria para adquisición de materias primas y agrícolas que serán procesadas aquí, o para reestructurar oficinas de registro, raíz e hipotecas (2.8 millones de colones).

Sin embargo, una vez más, durante el mes de octubre la guerra es el objetivo principal del conflicto. El FMLN continuó durante todo el mes la campaña militar que inició en septiembre. Durante octubre realizó por lo menos 165 acciones importantes (34 en el departamento de Usulután, 32 en el de Cuscatlán, 17 en los de San Vicente y San Miguel, 14 en el de San Salvador y 13 en el de Morazán), de las que 2 fueron de sabotajes (a puentes secundarios de Usulután), 34 tomas, 119 acciones de combate y 10 de distinta índole, además de capturar 109 elementos armados. Como consecuencia, la F.A. habría tenido 117 muertos (1 teniente, 7 subtenientes, 5 sargentos, 3 subsargentos, 1 cabo, 93 soldados, 6 guardias nacionales y 1 policía militar); pero si se incluyen los elementos paramilitares, el saldo habría sido de 185 muertos, 148 heridos y 75 bajas, para un total de 408 "bajas". Al mismo tiempo, el FMLN habría recuperado 303 armas largas y 5 cortas (123 en Usulután, 87 en Cabañas, 54 en San Miguel y 31 en Cuscatlán), más 19 de apoyo, 6 radios, casi 30.000 cartuchos, 30 granadas de mano, 71 proyectiles pesados, y habría averiado un avión de combate. Según la comandancia del FMLN, el balance final de la campaña "Independencia, libertad y democracia para El Salvador" sería de 1.121 bajas en la F.A. (entre muertos y heridos), 212 prisioneros, 512 fusiles recuperados, 22 armas de apoyo y 16 radios, junto con muchos miles de municiones. El FMLN tomó por lo menos 17 poblaciones del oriente del país, una en San Vicente y 3 en la región central (con lo que, de acuerdo a los asesores

militares norteamericanos, desde septiembre ha atacado más de 60 poblaciones en 9 de los 14 departamentos del país), corriéndose hacia San Vicente y obstaculizando el plan CONARA al tiempo que causando una gran desmoralización de las tropas regulares, destruyendo dos beneficios de café en Jucuapa, subestaciones eléctricas y postes de conducción en diversos sitios, tomando tramos de importantes carreteras y cortando el tráfico. Las acciones más importantes y conocidas fueron las tomas de Jutiapa (Cabañas), Santa Cruz Michapa (Cuscatlán), Tenancigo y Tejutepeque (Cabañas).

El ejército mantuvo una actitud más bien defensiva, aunque montó algunos operativos: uno mediano en San Vicente, el 7 de octubre, en el que la FA. dijo haber causado la muerte de 150 miembros del FMLN y aceptó 5 muertos y 7 heridos en sus filas; otro en oriente, el día 16, movilizándolo 8.000 efectivos, del cual no se ha tenido noticias y un tercero en San Miguel, también mediano, a partir del día 18, en el que la FA. Dijo haber causado 124 bajas al enemigo y admitió 4 muertos y 11 heridos en sus filas.

Pero fue la represión a la población civil la que se desató violentamente en el mes, hasta el punto de que el mismo gobierno, la F.A., la embajada norteamericana, el Departamento de Estado y la Casa Blanca protestaron contra la vesanía de los "escuadrones de la muerte" vinculados con la ultraderecha y con algunos mandos militares y cuerpos de seguridad. Kissinger y su comitiva también exigieron al gobierno poner coto a semejante brutalidad.

El ESA se responsabilizó del asesinato de un supuesto guerrillero para mostrar hasta dónde está dispuesto a llegar con los "traidores a la patria"; la BAMHM hizo pasar un videocasette en la televisión privada en el que entrevistaba a tres de los secuestradores que se hacían cargo de militar en el PC y tener conexiones con una serie de personas, incluido el arzobispo, embajadores y profesionales; horas más tarde los cuerpos estrangulados de cuatro personas (el secretario general de la FUSS, la profesora universitaria Dora Muñoz y otros dos; tres de los cuales habían aparecido en las referidas declaraciones) aparecieron en una colonia de la capital. Otro secuestrado, días más tarde, hizo declaraciones acusando a las altas autoridades de la Universidad Nacional; lo mismo hizo un supuesto sindicato de trabajadores de esa institución. El ESA colocó una bomba incendiaria en una imprenta del centro de San

Salvador, provocando un grave incendio que consumió varios negocios, bajo la acusación de que el dueño de la imprenta era comunista. El Comando Nacionalista Salvadoreño dio un ultimátum al colegio Guadalupano, exigiendo primero que unos libros de canto religioso fueran depositados en los cuerpos de seguridad (lo que da pistas para entender sus vinculaciones), por ser subversivos, y luego ofreció la alternativa de depositarlos en *El Diario de Hoy* (otra pista más para conocer las conexiones existentes). Las denuncias que los domingos han hecho Mons. Rivera y Mons. Rosa contra semejante grado de violencia y desquiciamiento del orden social, así como su insistencia en el diálogo como solución para el país, les merecieron también amenazas de los escuadrones de la muerte; pues consideran que sus homilias contribuyen a deteriorar la imagen del país y desinformar en el exterior, siendo utilizados por los comunistas. El mismo D'Aubuisson parece que reconoció ante la comisión Kissinger que los escuadrones tenían vinculaciones con ciertos militares, aunque luego desmintiera estas declaraciones y pidiera a Kissinger esclarecerlo. Es explicable que la ANEP, que no perdona oportunidad para pronunciarse, no haya protestado contra esta barbarie, pero que la comisión oficial de derechos humanos no lo haya convertido en bandera de protesta y acción es de todo punto inexcusable. Como resultado, en el mes de octubre fueron capturadas 54 personas, de las cuales 23 se dieron por desaparecidas, 3 fueron asesinadas y el resto fueron sometidas a arresto; la guerrilla también secuestró a un campesino. Se tuvo conocimiento de 441 personas de la población civil muertas por los cuerpos armados (352 de ellas en operativos y enfrentamientos), mientras la guerrilla habría asesinado a 5 personas.

En el plano internacional los nubarrones se convirtieron en tormenta. Aunque la Cámara baja exigió la certificación de Reagan para continuar con la ayuda a El Salvador, el Senado votó en contra, por lo que ese requisito ya no está vigente. Mientras Contadora es apoyada, al menos verbal y formalmente por EE.UU. y los gobiernos de la región, y tanto más cuando Nicaragua se empeña en llevar al seno de la ONU la crisis regional, la administración norteamericana está acelerando la reestructuración del CONDECA, por medio de sucesivas reuniones de los militares del área del más alto nivel, bajo la tutoría del Comando Sur, y se alistan tropas y planes para po-

sibles intervenciones. Stone realizó un largo viaje por Europa, a fin de convencer a los gobiernos de la política norteamericana para el área. La comisión Kissinger visitó la región y recibió en todas partes solicitudes de ayuda, a pesar de que no era ese su objetivo; en Honduras, la FA llegó a la osadía de pedir tal tipo de vinculación defensiva que, no sin razón, ha sido equiparada a un estatuto de protectorado si no de Estado libre asociado (similares a Corea del Sur o Puerto Rico), para que no quede duda alguna del nacionalismo y patriotismo de sus dirigentes. En cambio, los presidentes de México y Costa Rica se reunieron también, llegando a acuerdos que acercaron más al gobierno tico a las posiciones de Contadora.

La presión contra Nicaragua pasó a una nueva fase armada con una serie de ataques aéreos, navales y terrestres contra instalaciones vitales, con ayuda y respaldo de aviones de vigilancia norteamericanos, de la CIA, de bases hondureñas y salvadoreñas en las que los aviones fueron provisionados y artillados; el daño mayor fue el incendio de 5 tanques de combustible en Corinto, con la destrucción de gran parte de las instalaciones y productos almacenados, la necesidad de reubicar a la población y la consiguiente implementación de un plan de austeridad, racionamiento y preparación para agresiones aún mayores. A pesar de que la Cámara de Representantes votó contra la continuación de la ayuda a los antisandinistas, el Senado votó a favor, lo que llevará a un acuerdo conjunto que prorrogará la ayuda con muchos millones de dólares que se pierden, no sólo en armas, sino también en gastos no muy justificados y aun corruptos de algunos dirigentes somocistas. Por su parte, el gobierno nicaragüense, por medio del canciller D'Escoto, presentó al Departamento de Estado una nueva propuesta de paz, con la posibilidad de tratados bilaterales de respeto, paz y no-agresión con EE.UU. y con Honduras, así como tratados multilaterales con el resto del área, comprometiendo a respetarlos y a implementar mecanismos de control supervisado, el no prestar apoyo a movimientos contra los demás gobiernos, etc. Sin embargo, la administración norteamericana despreció la oferta achacándole insuficiencia y sosteniendo que es en el seno de Contadora donde se debe ventilar el conflicto.

Pero lo que ha sacudido la región ha sido la intervención armada norteamericana en Grenada junto con un minúsculo contingente simbólico de soldados de algunos países caribeños orientales.

La deposición, reclusión, liberación y posterior asesinato de Maurice Bishop y parte de su gabinete, así como la desaprobación cubana a los hechos (lo que indicaría que su gobierno se abstendría de apoyar al de la pequeña isla), dieron luz verde a la acción militar, bajo la excusa de proteger las vidas de los norteamericanos, acabar con el caos e implantar la democracia. La realidad fue muy otra; lo que EE.UU. en verdad llevó a cabo fue terminar con la resistencia grenadina ayudada de algunos soldados o trabajadores cubanos, exterminar todo lo relacionado con el anterior gobierno, reimplantar un régimen favorable a sus intereses, obligar a romper relaciones con los países socialistas y expulsar a sus diplomáticos, mantenerse allí mientras no se asegure un futuro acorde con sus conveniencias o ver la posibilidad de instalarse definitivamente, destruir lo que se pusiera al paso (incluida una clínica de enfermos mentales con un elevado número de víctimas) y darse la satisfacción emocional de ayudar a reconstruir el país. Las objeciones e incluso la oposición de fuerzas y gobier-

nos sensatos (incluido el de su gran aliado británico) no fueron óbice para el experimento. Sin embargo, la evaluación posterior ha sido bastante negativa: la resistencia fue mayor de lo esperada, y no por tener mucha tropa ni armas sofisticadas; los servicios de inteligencia militares nuevamente fallaron en sus apreciaciones; los costos en vidas humanas, helicópteros y material bélico fueron superiores a lo previsto y admitido (según la BBC); el aislamiento y condena internacional fue demasiado alto. El experimento cumplió su objetivo: mostró los costos de todo tipo; se ensayó en una isla insignificante donde era fácil y barato probar; pero los resultados apuntan a que en Cuba, Nicaragua o El Salvador (a pesar del temor y las denuncias justificadas de invasión de parte de los movimientos o gobiernos de izquierda) una acción similar sería cualitativamente distinta e intolerable. El futuro dirá hasta dónde está dispuesto a llegar Reagan.

Eugenio C. Anaya, h.

